

## **CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL**

### **A/A DEL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE . SECRETARÍA DEL CAMA**

#### **Alegaciones al borrador de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental de CLM**

Yo, Santiago Salvador de León, [DATOS PERSONALES], miembro del CAMA por Ecologistas en Acción y en representación de la plataforma Toledo Aire Limpio, que presido, con CIF nº G45674421, entre cuyos fines están la defensa de espacios naturales, la prevención en la generación de residuos, la lucha contra los peligros ambientales y su divulgación en orden a promover y colaborar activamente en todas las tareas encaminadas a defender la salud y los derechos ambientales, acreditada, por tanto, como parte interesada en la elaboración de esta ley, presento las siguientes

**ALEGACIONES** al borrador de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental de CLM :

1ª. Se dice en la primera página del texto que “los procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios ... : d) Quien contamina paga”.

Sin embargo, eso no es suficiente, sino que “quien contamina paga y repara”. Es evidente que no se palía el daño sólo con una mera sanción, que puede ser un mal menor para una gran empresa, sin que se siga necesariamente de ello un beneficio ambiental, que es el principal objetivo a defender. Por tanto, junto a la multa debe prescribirse la reparación del daño restableciendo la misma situación previa a éste. Esto es especialmente exigible cuando se desmantela una industria contaminante, lo que debe conllevar un informe base del suelo y de las aguas subterráneas en todos los casos, para eliminar filtraciones o vertidos producidos durante su período de actividad.

2ª. Otro principio, el i), es el de la participación pública antes y durante el procedimiento, al que nos parece justo añadir, siguiendo la ley 27/2006 de participación pública, el momento posterior a la aprobación del procedimiento, haciéndose consultas en toda la tramitación del mismo a las personas interesadas, pero, especialmente, añadiríamos, a los posibles afectados por los efectos contaminantes de la instalación, quienes tendrán derecho, como dice el texto legal aludido, a que sus opiniones, quejas o sugerencias sean tenidas en cuenta por la Administración competente, y especialmente, si están apoyadas por mociones aprobadas en sus ayuntamientos.

3ª. Dice el artículo 6 sobre el Ámbito de aplicación de la Evaluación Ambiental que éste se extenderá a los supuestos del Anexo I, así como a “los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo I”.

Nosotros añadiríamos también los presentados con poca diferencia de tiempo (hasta 1 año) por una misma fábrica, que pudieran conllevar un fraccionamiento encubierto; así como los

proyectos que han sido modificados varias veces en pocos años, adquiriendo la suma de sus modificaciones un aumento significativo de la capacidad de producción con que inició su actividad y solicitó la autorización. A este respecto, se señala en el apartado c) de este artículo que se considerará modificación sustancial “cualquier modificación de las características ...cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el Anexo I”. La expresión “por sí sola” da lugar a una interpretación laxa que habría que precisar diciendo, por ejemplo, que toda variación de las condiciones de producción será significativa si el elemento nuevo que se introduce alcanza los umbrales establecidos, de modo que, cuando se sustituye, por ejemplo, un combustible por otro, aunque sea en la misma cantidad, habrá que valorar la proporción de éste respecto del total para ver si llega al umbral, ya que esa variación, aun manteniendo un volumen equivalente, puede representar un cambio cualitativo relevante.

4ª. Dice el texto que la evaluación de impacto ambiental será ordinaria cuando se prevean efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente. Pero, por desgracia, es demasiado habitual que se relativice la importancia de este principio supeditándolo a que el propio promotor se comprometa a tomar medidas correctoras, que no deberían idearse con posterioridad al impacto, sino precisamente para prevenirlo y, por tanto, previas a la actuación de aquél, definiéndose objetivamente cuáles son las situaciones de riesgo que éste estará obligado a atajar desde un principio, sin rebajar un ápice esta exigencia.

5ª. El artículo 38, punto 3, insta a que el documento inicial del proyecto cuente con : c) un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. Está claro que si hay una sobreabundancia de industrias contaminantes en una misma zona, debe ponerse un límite a la actividad empresarial. Esto no se recoge en este artículo porque no se determina ningún límite de carga contaminante y la realidad es que se siguen autorizando proyectos en zonas con un elevado índice de contaminación. Si a esto le añadimos que no se hacen estudios epidemiológicos, la consecuencia es que se echa en falta un control más estricto, básico para la protección de la salud de la población afectada.

Proponemos que, al menos, sí se tengan en cuenta los Registros E-PRTR y, más importante aún, los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente basados en los datos aportados en esos Registros, carentes hasta ahora de toda relevancia en los estudios de impacto ambiental, siendo que dichos informes contienen una valoración de la “pérdida de expectativa de vida” y de las “muertes asociadas a la contaminación atmosférica” ( índices VOLY y VSL) a las que han podido contribuir esas actividades contaminantes. En relación con esto, se debe promover en la ley la exigencia del “informe del órgano con competencia en materia de salud pública” en todos los casos en que la población lo solicite y no sólo, como dice ambiguamente el borrador, “cuando proceda”, ya que es algo que procede en todo momento en que los afectados sienten en riesgo su derecho a la salud.

6ª. El artículo 51.1 habla de extender los efectos de la DIA de un proyecto a otros similares del mismo promotor presentados en el plazo de un año. Nos parece un peligroso

reduccionismo que no tiene en cuenta posibles detalles diferenciadores que convendría analizar por separado y sin urgencias, haciendo un especial hincapié en los impactos de carácter acumulativo que inevitablemente habrán de producirse.

7ª. Incide el texto sobre la necesidad de coordinación entre la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada (AAI), regulada por la ley 5/2013, de prevención y control integrados de la contaminación; no obstante, se detecta una flagrante descoordinación entre ambas cuando dicho borrador, para determinar las instalaciones que deben someterse a la evaluación de impactos, en el Anexo I, Grupo 8, correspondiente al tratamiento y gestión de residuos, establece los umbrales de capacidad en 100 tn/día o 4tn/hora, que son claramente distintos y más laxos que los umbrales que la ley 5/2013 fija para el sometimiento a AAI de esas instalaciones, que son de 75 tn/día (los mismos que la antigua ley de Evaluación Ambiental de CLM, 4/2007) o de 3 tn/día.

8ª. Se expone en el Anexo VI, sobre “El objeto y descripción del proyecto”, y en concreto, en el apartado d), la obligación de incluir una “declaración del cumplimiento del criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de acuerdo con las normas básicas de protección radiológica” para proyectos sometidos al RD 1836/1999 de 3 de diciembre, relativos a instalaciones nucleares y radiactivas y emisoras de radiaciones ionizantes. Como el criterio ALARA en sus siglas en inglés insta a emitir radiaciones “tan bajas como sea razonable o técnicamente posible”, creemos que es una buena ocasión para aplicar igualmente ese mismo criterio ALARA, como recomienda la Asamblea del Parlamento y del Consejo de Europa, a las radiaciones no ionizantes, según su Resolución 1815 de 2011, en aplicación del principio de precaución.

9ª. Opinamos que es fundamental en toda evaluación de impacto ambiental, sea ordinaria o simplificada, mantener unos indicadores comunes a ambas para evitar la dilución de medidas que son necesarias en el control de los impactos y que en la práctica tienden a rebajar su exigencia a través de resoluciones exprés y “ad hoc” encaminadas a salvar lo que desde la óptica empresarial se consideran obstáculos, pero bajo la perspectiva de un eficaz seguimiento y corrección de riesgos es ineludible para garantizar un buen funcionamiento de esas medidas de prevención ambiental. Entre esas rebajas de exigencia está el levantamiento de ciertos controles que va imponiéndose con el tiempo, debido a la continua concesión de modificaciones a las fábricas, como el del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental, que algunas empresas intentan eludir, como hemos visto, mediante el sucesivo fraccionamiento de solicitudes de modificación no sustancial, o el incremento inmotivado de los VLE o la supresión de la mediciones de cada vez más componentes de los vertidos de aguas residuales o la supresión del informe base del suelo y de las aguas subterráneas a empresas con emisiones contaminantes o la eliminación de la descripción de las condiciones de funcionamiento de los hornos canalizados, que es precisamente una información valiosísima para saber si se diluyen los gases de combustión en los caudales de aire provenientes del interior de la fábrica, como han observado algunos OCAs, reflejando así

unos valores de sustancias contaminantes inferiores a los reales, o el declinar la obligación de analizar previamente las materias primas que van a fundirse en los hornos, su composición de metales pesados y otras sustancias, en cuya disminución están comprometidas la legislación europea y española, o, finalmente, el hecho de que muchas industrias con hornos de combustión no se sientan obligadas a tener filtros operativos que frenen la salida al exterior de partículas y otras sustancias tóxicas.

Todos éstos son aspectos que no costaría mucho mejorar, puesto que, antes de haber sido reducidos a la condición de prescindibles, estaban recogidos en las condiciones exigidas a toda instalación industrial con capacidad de liberar emisiones al medio ambiente.

Ténganse por presentadas estas ALEGACIONES en nombre de TOLEDO AIRE LIMPIO.

En Toledo, a 29 de junio de 2018

Fdo. Santiago Salvador de León, presidente de TOLEDO AIRE LIMPIO y miembro del CAMA por Ecologistas en Acción